Contenido

[ANTECEDENTES 1](#_Toc187830196)

[DE LA SOLICITUD DE ACCESO A DATOS PERSONALES 1](#_Toc187830197)

[a) Solicitud de Acceso a Datos. 1](#_Toc187830198)

[b) Solicitud que no cumple con los requisitos por notificar (Art.155) 2](#_Toc187830199)

[DEL RECURSO DE REVISIÓN 2](#_Toc187830200)

[a) Interposición del Recurso de Revisión 2](#_Toc187830201)

[b) Turno del Recurso de Revisión 3](#_Toc187830202)

[c) Admisión del Recurso de Revisión 4](#_Toc187830203)

[d) De la etapa de conciliación: 4](#_Toc187830204)

[e) Informe Justificado del Sujeto Obligado 5](#_Toc187830205)

[f) Manifestaciones de la Parte Recurrente 5](#_Toc187830206)

[g) Ampliación de plazo para resolver el Recurso de Revisión 5](#_Toc187830207)

[h) Cierre de instrucción 8](#_Toc187830208)

[CONSIDERANDOS 9](#_Toc187830209)

[PRIMERO. Procedibilidad 9](#_Toc187830210)

[a) Competencia del Instituto 9](#_Toc187830211)

[b) Legitimidad de la parte recurrente 9](#_Toc187830212)

[c) Plazo para interponer el recurso 10](#_Toc187830213)

[d) Causal de procedencia 12](#_Toc187830214)

[e) Requisitos formales para la interposición del recurso 12](#_Toc187830215)

[SEGUNDO. Estudio de Fondo 12](#_Toc187830216)

[a) Controversia a resolver 12](#_Toc187830217)

[b) Estudio de la controversia 13](#_Toc187830218)

[c) Versión pública 40](#_Toc187830219)

[d) Conclusión 46](#_Toc187830220)

Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, de **quince de enero de dos mil veinticinco.**

**VISTO** el expediente formado con motivo del Recurso de Revisión **05872/INFOEM/AD/RR/2024,** interpuesto por **XXXXX XXXXX XXXXX**, a quien en lo subsecuente se le denominará **LA PARTE RECURRENTE**, en contra de la respuesta emitida por el **Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli**, en adelante **EL SUJETO OBLIGADO**, se emite la presente Resolución con base en los Antecedentes y Considerandos que se exponen a continuación:

# ANTECEDENTES

## DE LA SOLICITUD DE ACCESO A DATOS PERSONALES

### a) Solicitud de Acceso a Datos.

El **trece de agosto de dos mil veinticuatro**, **LA PARTE RECURRENTE** presentó su solicitud de acceso a datos personales ante el **SUJETO OBLIGADO**, a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales en el Estado de México, en lo subsecuente **EL SARCOEM**. Dicha solicitud quedó registrada con número de folio **00001/CUAUTIZC/AD/2024** y en ella se requirió la siguiente información:

“Quien suscribe la presente solicitud de Derechos ARCOP de nombre XXXXX XXXXX XXXXX solicito de la manera más atenta a la Secretaría General de Gobierno, al Municipio de Cuautitlan Izcalli, OPERAGUA y Secretaría de Finanzas del Estado de México, se sirvan informar, así como proporcionar en vía digital los tramites, solicitudes, pagos de derechos así como de impuestos de la persona moral XXXXXX XXXXX XX XXXXXX S.A. DE C.V. y/o XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX S.A. DE C.V. por el periodo comprendido del 5 de junio de 2020 a la fecha. Lo anterior debido a diversos trámites personales, ya que la empresa antes mencionada a estado usando mi nombre para dichos tramites sin mi consentimiento. De lo anterior solicito de la manera más atenta la información sea enviada por vía digital al correo XXXXXXXXXXXXXXX@hotmail.com.”

MODALIDAD DE ENTREGA: Vía Información en medio electrónico facilitado por el titular. (Correo electrónico)

### b) Solicitud que no cumple con los requisitos por notificar (Art.155)

De las constancias que obran en el expediente electrónico del SAIMEX, se advierte que el SUJETO OBLIGADO entregó el siguiente archivo digital:

* **20240820183604622.pdf**.- Contiene un oficio firmado por la Coordinadora de Transparencia del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli la cual informa que al no anexar documento de identificación la solicitud no cumple con los requisitos del artículo 110 fracción segunda de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto Obligados del Estado de México y Municipios, por ende no es posible otorgar contestación.

## DEL RECURSO DE REVISIÓN

### Interposición del Recurso de Revisión

Inconforme por la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**, en fecha **veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro**, **LA PARTE RECURRENTE** interpuso el Recurso de Revisión materia del presente asunto, en el que señaló como:

**Acto Impugnado:**

“la falta de acceso a la información derivado de que en primer pronunciamiento en ningún momento se notificó la parte ahora recurrente prevención alguna por el medio señalado, a su vez no entrega la información o no pone a disposición la información para poder recogerla yo o por medio de un tercero con carta poder.” (Sic).

**Razones o Motivos de Inconformidad:**

“la falta de acceso a la información derivado de que en primer pronunciamiento en ningún momento se notificó la parte ahora recurrente prevención alguna por el medio señalado, a su vez no entrega la información o no pone a disposición la información para poder recogerla yo o por medio de un tercero con carta poder.” (Sic).

Debiendo destacar que EL RECURRENTE presentó el archivo digital denominado EOP INE Actual Oficial.pdf, que contiene el siguiente documento:

* Credencial para votar con fotografía a nombre de XXXXX XXXXX XXXXX, anverso

y reverso

### b) Turno del Recurso de Revisión

El **veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro** el Recurso de que se trata se envió electrónicamente al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios y con fundamento en los artículos 11 y 127 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y 185, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de aplicación supletoria, se turnó a través del SARCOEM a la Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez efecto de decretar su admisión o desechamiento.

### c) Admisión del Recurso de Revisión

Por consiguiente el **treinta de septiembre de dos mil veinticuatro,** se acordó tener por acreditada la identidad de **LA PARTE RECURRENTE** así como la admisión a trámite del Recurso de Revisión que no ocupa; así como la integración del expediente respectivo, otorgándoles a las partes un **plazo no mayor de siete días** manifiesten, por cualquier medio, su **voluntad de conciliar**, conforme a lo dispuesto en los artículos 11, 127 y 131 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y 185 fracciones I, II y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios de aplicación supletoria.

### d) De la etapa de conciliación:

De las constancias del expediente electrónico del **SARCOEM**, se advierte que **LA PARTE RECURRENTE no remitió documento alguno;** por su parte el **SUJETO OBLIGADO** entregó los siguientes documentos:

* **recursosarcoem.pdf.-** Oficio que remite la Coordinadora de Transparencia del SUJETO OBLIGADO, mediante el cual ratifica su respuesta primigenia y además manifiesta su entera disposición para conciliar solicitando se realicé la diligencia pertinente vía zoom.
* **Captura de pantalla 2024-10-10 171127.png.-** Se anexa la captura de pantalla poniendo en evidencia que la parte RECURRENTE no presentó ningún archivo al omento de la interposición de su solicitud de información.

### e) Informe Justificado del Sujeto Obligado

**EL SUJETO OBLIGADO** no rindió su informe justificado dentro del término legalmente concedido para tal efecto.

### f) Manifestaciones de la Parte Recurrente

**LA PARTE RECURRENTE** no realizó manifestación alguna dentro del término legalmente concedido para tal efecto, ni presentó pruebas o alegatos.

### g) Ampliación de plazo para resolver el Recurso de Revisión

Con fundamento en lo dispuesto artículos 82, fracción III y 133 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, **el catorce de enero de dos mil veinticinco,** se acordó ampliar por un periodo razonable el plazo para resolver el presente Recurso de Revisión.

El plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos por este Instituto, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Es importante precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable. En ese sentido, el legislador estableció los términos procesales de forma general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma, debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

**Complejidad del asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.

**Actividad Procesal del interesado:** Acciones u omisiones del interesado.

**Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

**La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso:** Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “**TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO**.”, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

**“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.”** consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

**“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados señala que este exceso del plazo legal para resolver el asunto resulta de carácter excepcional.

### h) Cierre de instrucción

Al no existir diligencias pendientes por desahogar, el **catorce de enero de dos mil veinticuatro** la **Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez** acordó el cierre de instrucción y la remisión del expediente a efecto de ser resuelto, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 fracciones VI y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios de aplicación supletoria actualizando para tal efecto el artículo 127 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. Dicho acuerdo fue notificado a las partes el mismo día a través del SARCOEM.

# CONSIDERANDOS

## PRIMERO. Procedibilidad

### a) Competencia del Instituto

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo, trigésimo primero y trigésimo segundo, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios de aplicación supletoria; 1, 81, 82 fracciones I y III, 119, 127, 128 y 129 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; y 9, fracciones I y XXIV y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

### b) Legitimidad de la parte recurrente

El recurso de revisión fue interpuesto por parte legítima, ya que se presentó por la misma persona que formuló la solicitud de acceso a datos personales,debido a que los datos de accesoSARCOEM son personales e irrepetibles.

### c) Plazo para interponer el recurso

Esta Ponencia analizó las causales de procedencia del Recurso de Revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que en ese orden de ideas se advierte que el recurso de revisión no se emitió respuesta.

Derivado de lo anterior, se constituye la figura jurídica de la **NEGATIVA FICTA**, la cual consiste en atribuir un efecto negativo al silencio de la autoridad administrativa frente a las instancias y solicitudes que hagan los particulares.

Lo anterior atendiendo a que lo que dispone el artículo 108 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios relativo al plazo de respuesta que tiene el **SUJETO OBLIGADO**, que lo es de 20 días contados a partir de la recepción de la solicitud de información, como se advierte a continuación:

**Plazo de Respuesta, Ampliación y Negativa**

**Artículo 108**. El responsable deberá establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de los derechos ARCO, privilegiando los mecanismos que faciliten su ejercicio de una manera breve y ágil.

**El plazo de respuesta no deberá exceder de veinte días contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud.**

El plazo referido en el párrafo anterior podrá ser ampliado por una sola vez hasta por diez días cuando así lo justifiquen las circunstancias y siempre y cuando se le notifique al titular dentro del plazo de respuesta.

Plazo para interponer recurso de revisión

Así como lo estipulado en el artículo 128 de la citada ley que expone la negativa de otorgar respuesta a la solicitud para ejercer derechos ARCO al ya haber transcurrido el plazo previsto, el solicitante podrá interponer su recurso de revisión dentro de los quince días siguientes posteriores al haber vencido el plazo para dar respuesta, como se advierte a continuación:

**Artículo 128.** El titular, por sí mismo o a través de su representante, podrán interponer un recurso de revisión ante el Instituto o la Unidad de Transparencia del responsable que haya conocido de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, dentro de un plazo que no podrá exceder de quince días contados a partir del siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta.

Transcurrido el plazo previsto para dar respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO sin que se haya emitido ésta, el titular o en su caso, su representante podrán interponer el recurso de revisión dentro de los quince días siguientes al que haya vencido el plazo para dar respuesta.

Por ende, al realizar una revisión del expediente, la interposición de la solicitud para ejercer derechos ARCO, fue el trece de agosto de dos mil veinticuatro, posterior a esta fecha, el **SUJETO OBLIGADO** contaba con veinte días para emitir respuesta, sin haber acontecido esto, pues solo realizó un pronunciamiento aduciendo que al no cumplir el solicitante con los requisitos del artículo 110 fracción segunda de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto Obligados del Estado de México y Municipios, no era posible otorgar respuesta, sin realizar prevención alguna; por ende acorde a lo estipulado en el artículo 128 párrafo segundo, el **RECURRENTE** contaba con quince días posteriores al fenecimiento de los veinte días que tenía de plazo el **SUJETO OBLIGADO** para otorgar respuesta, feneciendo el día tres de octubre de dos mil veinticuatro.

Atento a lo anterior, si el recurso de revisión fue interpuesto el veintinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, el RECURRENTE se encuentra en término para interponerlo y por ende se le da el trámite correspondiente.

### d) Causal de procedencia

Resulta procedente la interposición del recurso de revisión, ya que se actualiza la causal de procedencia señalada en el artículo 129, fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.

### e) Requisitos formales para la interposición del recurso

Del análisis efectuado, se advierte que resulta procedente la interposición del recurso y se concluye la acreditación plena de todos y cada uno de los elementos formales exigidos por el artículo 130 de la de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, en atención a que fue presentado mediante el formato visible en **EL SARCOEM**.

## SEGUNDO. Estudio de Fondo

### a) Controversia a resolver

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada, resulta conveniente precisar que, una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que **LA PARTE RECURRENTE** solicitó lo siguiente:

* Los tramites de la persona moral XXXXXX XXXXX XX XXXXXX S.A. DE C.V. y/o XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX S.A. DE C.V. por el periodo comprendido del 5 de junio de 2020 al trece de agosto de dos mil veinticuatro, atendiendo a que la empresa antes mencionada a estado usando su nombre para realizar trámites sin su consentimiento, solicitando la información sea enviada por vía digital al correo XXXXXXXXXXXXXXX@hotmail.com.

Ante dicha petición **EL SUJETO OBLIGADO** se pronunció refiriendo que la solicitud es improcedente, pues no se anexó documento de identificación, pues no se cumplió con los requisitos del artículo 110 fracción II de la Ley de Protección de Datos.

Se destaca que en vía de conciliación el **SUJETO OBLIGADO** entregó escrito mediante el cual, informa la apertura para realizar la conciliación, no obstante ello no existió pronunciamiento de la parte **RECURRENTE**.

### b) Estudio de la controversia

Previamente al estudio del fondo del asunto, es conveniente precisar al Recurrente que los principios en materia de transparencia nos son aplicables a los datos personales, toda vez que aquellos principios constitucionales aplicables a las solicitudes de acceso a información pública están enfocados a la publicidad de la información y por el contrario el tratamiento de datos personales se rige por sus principios específicos de calidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad, licitud, proporcionalidad y responsabilidad, establecidos en los artículos 15 a 28 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, los cuales tienen por objetivo la máxima protección de los datos personales para evitar su acceso no autorizado y no generar afectaciones a los titulares de los mismos. Este es el contexto jurídico, sobre el cual se realiza el análisis para otorgar o restringir el derecho a acceder a datos personales.

Primero resulta procedente delimitar lo pertinente al **SUJETO OBLIGADO** del que se está solicitando la información pues es de recordar que en la solicitud de información **LA PARTE RECURRENTE** hace alusión a tres **SUJETOS OBLIGADOS**, solicitando la información; sin embargo cabe destacar que al realizar pronunciamiento el **SUJETO OBLIGADO** en etapa de conciliación haciendo del conocimiento que de acuerdo al Reglamento de Organización interna de la Administración Pública de Cuautitlán Izcalli, **la Secretaría General de Gobierno, OPERAGUA y la Secretaría de Finanzas del Estado de México**, no existen ni están adscritas AL Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli; por ello conviene citar lo ateniente a la estructura con la que cuenta EL sujeto obligado, la cual se encuentra en dicho reglamento como se advierte a continuación:

**Artículo 22.-** La Administración Pública Municipal de Cuautitlán Izcalli, además de la oficina de la Presidencia Municipal y sus áreas administrativas adscritas, estará conformada por las siguientes dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados:

**I. Dependencias:**

a) Secretaría del Ayuntamiento;

b) Tesorería Municipal;

c) Contraloría Municipal;

d) Comisaría General de Seguridad Ciudadana;

e) Dirección de Desarrollo Urbano;

) Dirección de Desarrollo Social;

g) Dirección de Desarrollo Económico;

h) Dirección de Servicios Públicos;

i) Dirección de Administración;

j) Dirección Jurídica;

k) Dirección de Obras Públicas; y

l) Dirección de Sustentabilidad y Medio Ambiente.

**II. Órganos Desconcentrados:**

a) Instituto Municipal para la Equidad de Género y el Desarrollo de las

Mujeres de Cuautitlán Izcalli IMEGDEM;

b) Instituto Municipal de la Juventud; y

c) Instituto Municipal de Planeación de Cuautitlán Izcalli IMPLAN

**III. Organismos Descentralizados:**

a) Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli;

b) Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli OPERAGUA, O.P.D.M.;

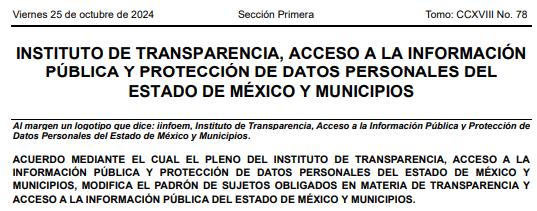
c) Organismo Público Descentralizado de Carácter Municipal para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli MAVICI;

d) Organismo Público Descentralizado de Carácter Municipal denominado Instituto

Municipal del Deporte de Cuautitlán Izcalli INMUDECI; y

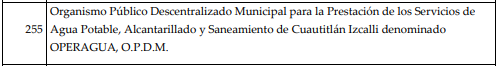
e) Los demás Organismos Descentralizados, empresas de participación paramunicipal y fideicomisos, que sean creados conforme a las normas aplicables.

De lo anterior, se puede advertir que dentro de la estructura del **SUJETO OBLIGADO** dichos entes citados, no están contemplados; máxime que atendiendo al Padrón de Sujetos Obligados, estos cuentan con la calidad de Sujetos Individuales, y por ende resulta correcta la apreciación expuesta por **EL SUJETO OBLOGADO**, lo anterior encuentra sustento en lo siguiente:









Ahora bien, debemos recordar que la presente solicitud de información fue desestimada por el **SUJETO OBLIGADO** en atención a que no fue acreditada la identidad del Titular, lo cual efectivamente no aconteció al momento de la interposición de la solicitud de información; no obstante ello el **SUJETO OBLIGADO** debió hacer uso de los mecanismos que tiene a su alcance y que se encuentran establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, en su artículo 11 el cual estipula lo siguiente:

**Prevención en caso de omisión de requisitos no subsanables**

**Artículo 111.** En caso que la solicitud no satisfaga alguno de los requisitos a que se refiere el artículo anterior y el responsable no cuente con elementos para subsanarla, se prevendrá al titular de los datos o a su representante dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de ejercicio de derechos ARCO, por una sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro de un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la notificación.

Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se tendrá por no presentada la solicitud de ejercicio de derechos ARCO.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el responsable para dar respuesta a la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO

Atento a lo anterior, debió realizar una prevención con el fin de que **LA PARTE RECURRENTE** acreditara su identidad, situación que no aconteció en el presente, y es además, es uno de los motivos de agravio expuestos, pues no le fue realizada ninguna prevención.

Previamente al estudio del fondo del asunto, es conveniente precisar al Recurrente que los principios en materia de transparencia nos son aplicables a los datos personales, toda vez que aquellos principios constitucionales aplicables a las solicitudes de acceso a información pública están enfocados a la publicidad de la información y por el contrario el tratamiento de datos personales se rige por sus principios específicos de calidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad, licitud, proporcionalidad y responsabilidad, establecidos en los artículos 15 a 28 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, los cuales tienen por objetivo la máxima protección de los datos personales para evitar su acceso no autorizado y no generar afectaciones a los titulares de los mismos. Este es el contexto jurídico, sobre el cual se realiza el análisis para otorgar o restringir el derecho a acceder a datos personales.

En ese orden de ideas, es necesario precisar que, la parte Recurrente se inconforma de la totalidad de la respuesta proporcionada, es decir la negativa de permitirle el acceso a *tramites, solicitudes, pagos de derechos y de impuestos*  realizados con su nombre.

En ese orden de ideas, es menester delimitar la competencia del Sujeto Obligado misma que se encuentra contemplada en el artículo 115, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, **que organicen la administración pública municipal**, **regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia** y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

En seguimiento al mandato constitucional referido *supra*, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece que, para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta de la persona titular de la presidencia municipal, las que estarán subordinadas a ésta. Las personas servidoras públicas titulares de las referidas dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerán las funciones propias de su competencia y serán responsables por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el funcionamiento del municipio[[1]](#footnote-1).

Para el despacho, estudio y planeación de los diversos asuntos de la administración municipal, el ayuntamiento contará por lo menos con las siguientes Dependencias[[2]](#footnote-2):

* 1. La Secretaría del Ayuntamiento;
  2. La Tesorería Municipal;
  3. La Dirección de Obras Públicas o equivalente;
  4. La Dirección de Desarrollo Económico o equivalente;
  5. La Dirección de Desarrollo Urbano o equivalente;
  6. La Dirección de Ecología o equivalente;
  7. La Dirección de Desarrollo Social o equivalente;
  8. La Coordinación Municipal de Protección Civil o equivalente; y
  9. La Dirección de las Mujeres o equivalente.
  10. Dirección del Campo o equivalente, preferentemente en los municipios cuyas características geográficas, territoriales, sociales, culturales, políticas y económicas sean predominantemente inherentes al ámbito rural.

Lo anterior es recuperado por el Bando Municipal de Cuautitlán Izcalli 2024, el cual establece que El Gobierno del Municipio está depositado en un cuerpo colegiado, denominado Ayuntamiento y la ejecución de sus acuerdos corresponderá a la persona titular de la Presidencia Municipal.

Correlativo a lo anterior, el numeral 27 del Bando Municipal de Cuautitlán Izcalli 2024, establece la estructura orgánica principal con la que se integrará el ayuntamiento, a saber:

**Artículo 27**. Para el despacho, estudio y planeación de los diversos asuntos, la administración pública municipal, contara con las siguientes dependencias: I. Oficina de la Presidencia;

II. Secretaría del Ayuntamiento;

III. Tesorería Municipal;

IV. Contraloría Municipal;

V. Comisaría General de Seguridad Ciudadana;

VI. Dirección de Desarrollo Urbano;

VII. Dirección de Desarrollo Social;

VIII. Dirección de Desarrollo Económico;

IX. Dirección de Servicios Públicos;

X. Dirección de Administración;

XI. Dirección Jurídica;

XII. Dirección de Obras Públicas; y

XIII. Dirección de Sustentabilidad y Medio Ambiente.

La **Dirección de Desarrollo Urbano** de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de Organización Interna de la Administración Pública del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, contará entre otras, con las siguientes facultades:

…

VII. Expedir las órdenes de pago que se requieran por concepto de trámites y servicios prestados por la Dirección de Desarrollo Urbano;

VIII. Expedir las órdenes de pago que se requieran por concepto de multas, sanciones administrativas y copias certificadas de los asuntos en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano;

…

XI. Difundir los requisitos y trámites para obtener las licencias, permisos, autorizaciones, cédulas y constancias en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcciones;

…

XV. Expedir, autorizar y llevar el registro de las licencias, permisos, autorizaciones, cédulas y constancias en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcciones;

XVI. Emitir autorizaciones de cambio de uso de suelo, densidad, coeficiente de ocupación, coeficiente de utilización, altura de edificaciones e intensidad de aprovechamiento del suelo y ordenar su publicación en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México;

…

XXV. Expedir, autorizar y registrar los permisos y licencias de obra para la instalación de anuncios publicitarios que requieran y no de elementos estructurales, así como la colocación de stands publicitarios, carpas, lonas, degustación, volanteo, valla móvil, pendones en la vía pública y propiedad privada en cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;

La **Dirección de Desarrollo Económico** de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de Organización Interna de la Administración Pública del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, contará entre otras, con las siguientes facultades:

…

III. Proponer y coordinar la ejecución de los programas y proyectos para el desarrollo económico y el fomento de las actividades industriales, comerciales y de prestación de servicios;

IV. Impulsar mecanismos de financiamiento para la ejecución de proyectos productivos orientados al fomento de las actividades industriales, comerciales y de prestación de servicios;

…

IX. Otorgar asesoría a los sectores sociales y privado en el establecimiento de nuevas empresas, en la elaboración de planes de negocios y en la vinculación para la obtención de recursos;

X. Operar la Ventanilla Única, así como, el Sistema de Apertura Rápida de Empresas y atender e informar a los particulares, de forma gratuita, los trámites que se realizan para el inicio de operaciones de las empresas, así como, mediante el Sistema de Apertura Rápida de Empresas;

XI. Previo el procedimiento correspondiente, revocar, rescindir, anular, cancelar o suspender los convenios y licencias de funcionamiento, en su caso, autorizar los cambios de giro, titulares, beneficiarios, dimensiones o cesiones de derecho de las Áreas Económicas, previamente autorizadas;

XII. Expedir Licencias, Permisos y Cédulas de Funcionamiento a las unidades económicas que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios, así como su revocación cuando no dependa de otra autoridad; asimismo, podrá expedir la Licencia Provisional de Funcionamiento o Permiso de Funcionamiento en los términos que señalan las disposiciones legales y reglamentarias respectivas, llevar un registro de ello, así como proponer campañas para la regularización de Licencias de Funcionamiento, previo cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;

…

XXVIII. Brindar atención personalizada para facilitar la gestión de trámite y servicios para la instalación, apertura, operación y ampliación de empresas;

…

XXXII. Otorgar la placa de dictamen de giro a los establecimientos que la requieran y cumplan con las disposiciones relativas y llevar registro de las mismas, de conformidad con la ley de la materia;

…

XXXIX. Convenir, cuando así proceda, con los titulares, permisionarios y/o responsables de las Unidades Económicas; con la finalidad de subsanar las irregularidades o faltas administrativas cometidas y que hayan dado origen al Procedimiento Administrativo común, previo el pago de la multa y/o sanción, que en derecho proceda; en términos de lo establecido en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México;

…

XLI. Crear y mantener actualizado el registro municipal de las unidades económicas que cuenten con el dictamen de giro, en los términos de la legislación de la materia;

La **Dirección de Servicios Públicos** de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 del Reglamento de Organización Interna de la Administración Pública del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, contará entre otras, con las siguientes facultades:

I. Prestar, administrar, operar y supervisar los servicios públicos municipales de alumbrado público, limpia y disposición de desechos sólidos urbanos no peligrosos, panteones y crematorios municipales, calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas, embellecimiento y conservación de los poblados, centros urbanos y obras de interés social;

La **Dirección de Obras Públicas** de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento de Organización Interna de la Administración Pública del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, contará entre otras, con las siguientes facultades:

III. Verificar que las obras incluidas en el Programa Anual de Obra Pública cuenten con la acreditación de la propiedad de los inmuebles donde será propuesta su realización; así como que cuenten con las autorizaciones, permisos o licencias ante las autoridades competentes;

…

VII. Coordinar los programas tendientes a la asistencia y desarrollo de los centros de población, con maquinaria, equipo y materiales básicos para la construcción de obras de mejoramiento de vialidades y edificios públicos;

La **Tesorería Municipal** será el órgano encargado de la recaudación de los ingresos municipales, así como de la administración de la hacienda municipal y responsable de realizar las erogaciones que realice el Gobierno Municipal. Razón de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento de Organización Interna de la Administración Pública del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la dependencia contará, entre otras, con las siguientes facultades:

…

VIII. Suscribir y hacer cumplir los convenios que se celebren con los contribuyentes para el cumplimiento diferido de obligaciones fiscales;

…

XXIV. Requerir de las dependencias correspondientes la información necesaria para determinar las obligaciones fiscales por el uso de infraestructura vial y espacios públicos para la prestación de servicios de transmisión de energía eléctrica, telefónicos, de imágenes, voz y datos y de cualquier otro que utilice bienes del dominio público municipal con o sin licencia, contrato, permiso, concesión o autorización;

…

XXXIII. Gestionar, resolver y otorgar las solicitudes de devolución, compensación, prórroga, condonación, exenciones y subsidios;

XXXIV. Vigilar el correcto funcionamiento del sistema para la tramitación y pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio, que se realicen vía internet;

…

XXXVII. Resolver las consultas que en materia de catastro, impuestos o derechos realicen los contribuyentes;

XL. Otorgar, previa autorización del Ayuntamiento, descuentos en multas, recargos y accesorios derivados de créditos fiscales con la finalidad de incentivar la disminución del rezago hacendario;

Ahora bien, como se pudo observar existe un sin número de facultades de cada una de las dependencias de la Administración Pública Municipal que puede ofrecer igual número de trámites y servicios a disposición de la ciudadanía, y conforme a lo solicitado por el particular hace referencia a soportes documentales relacionados a trámites y solicitudes sin especificar uno o una en particular.

No se omite mencionar que, existe una plataforma de acceso público en la que está inscrito en el catálogo de trámites, servicios, plazos y cargas tributarias de las dependencias estatales denominado “*Registro Estatal de Traites y Servicios*”, referido en el artículo 54 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México, el cual contempla la información relativa a cada tramite y/o servicio.

Asimismo, para los municipios existe el denominado *“Registro Municipal de Transmites y Servicios”* equivalente al Registro Estatal, en el cual se observaran los mismos requisitos y formalidades establecidas para el Registro Estatal, en ese contexto, es conveniente citar lo que se establece en los artículos 4, fracción XXIV, y 57 de la *supra* citada ley.

**“Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:**

..

**XXIV.** Registro Municipal: Al Registro Municipal de Trámites y Servicios que corresponda;

…

**Artículo 57.-** Los Ayuntamientos crearán un Registro Municipal de Trámites y Servicios equivalente al Registro Estatal, en el que se inscribirá el catálogo de trámites, servicios, requisitos, plazos y monto de los derechos o aprovechamientos aplicables de las dependencias municipales, debiendo observarse los requisitos y formalidades a que se refiere el artículo 54.”

Por otra parte, el artículo 92 fracción XXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios, establece que:

“**Artículo 92**. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera **permanente** y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

…

**XXIV.** Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen, así como los tiempos de respuesta;…”

De lo anterior en la página web <https://gobiernocizcalli.com.mx/VUEL/index.php> , en el apartado de Ventanilla Única Electrónica, en lo relativo a Trámites Y Servicios (REMTYS), se puede observar del Sujeto Obligado, el Registro Municipal de Trámites y Servicios, en que se encuentra catálogo de trámites servicios, requisitos, plazos y cargas tributarias de las dependencias municipales.

Ahora bien, como hemos visto en párrafos previos, la **Tesorería Municipal** es el órgano encargado de la **recaudación** de los ingresos municipales y responsable de realizar las erogaciones que haga el ayuntamiento[[3]](#footnote-3).

Lo anterior se robustece conforme a lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, dentro del cual, se reconoce que la Tesorería Municipal contará con las siguientes atribuciones:

“**Artículo 95.-** Son atribuciones del tesorero municipal:

(…)

**II.** **Determinar**, liquidar, **recaudar**, fiscalizar y administrar **las contribuciones** en los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, aplicar el procedimiento administrativo de ejecución en términos de las disposiciones aplicables;

(…)

**XIII.** Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Contribuyentes;

**(…**)”

Asimismo, respecto del pago de impuestos y de derechos, al respecto, el Código Financiero del Estado de México y Municipios, en su Título Cuarto, de los ingresos de los municipios, en su Capítulo Primero, De los Impuestos, y Capítulo Segundo, De los Derechos, establece los impuestos y derechos siguientes:

**CAPITULO PRIMERO**

**DE LOS IMPUESTOS**

**DEL IMPUESTO PREDIAL**

**Artículo 107.-** Están obligadas al pago del Impuesto Predial las personas físicas y jurídicas colectivas que sean propietarias o poseedoras, según se trate, de inmuebles en el Estado.

**DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES.**

**Artículo 113.-** Están obligadas al pago de este impuesto las personas físicas y jurídicas colectivas que adquieran inmuebles ubicados en el Estado, así como los derechos relacionados con los mismos.

**DEL IMPUESTO SOBRE CONJUNTOS URBANOS**

**Artículo 118.-** Están obligados al pago de este impuesto las personas físicas y jurídicas colectivas que desarrollen conjuntos urbanos, subdividan, modifiquen el tipo de conjunto urbano autorizado, incluyendo el tipo y número de viviendas previstas, conforme a lo que señala el Código Administrativo del Estado de México.

**DEL IMPUESTO SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS**

**Artículo 120.-** Están obligadas al pago de este impuesto las personas físicas o jurídicas colectivas que se anuncien en bienes del dominio público o privado, mediante anuncios publicitarios susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares de uso común, así como la distribución de publicidad impresa, sonorización y perifoneo, en la vía pública, que anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios. Lo anterior, observando las disposiciones aplicables en la materia, incluyendo las emitidas por la autoridad municipal de que se trate.

**DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS**

**Artículo 122.-** Están obligadas al pago de este impuesto las personas físicas o jurídicas colectivas que obtengan ingresos por la explotación de juegos y espectáculos públicos.

**CAPITULO SEGUNDO**

**DE LOS DERECHOS**

DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y RECEPCIÓN DE LOS CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TRATAMIENTO

DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL

DE LOS DERECHOS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE RASTROS

DE LOS DERECHOS POR CORRAL DE CONCEJO, E IDENTIFICACION DE SEÑALES DE SANGRE, TATUAJES, ELEMENTOS ELECTROMAGNETICOS Y FIERROS PARA MARCAR GANADO Y MAGUEYES

DE LOS DERECHOS POR USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES O DE SERVICIOS

DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE PANTEONES

DE LOS DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA Y DE SERVICIO PUBLICO

DE LOS DERECHOS POR LA EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO

DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA

DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO

De lo anterior se puede determinar que existe un gran número de trámites y servicios ofertados por la Administración Pública Municipal, así como un número importante de pagos de impuestos y derechos como obligación a las personas físicas y jurídico colectivas, de acuerdo a valores, adquisición de inmuebles, desarrollo de conjuntos urbanos, anuncios, ingresos por explotación de juegos y espectáculos; suministros de agua potable, servicios del registro civil, servicios en materia de desarrollo urbano, obras públicas o servicios públicos, por mencionar algunos.

Cabe precisar que en el cumplimiento de los principios que rigen la función pública, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 129 señala que los recursos económicos del Estado, de los Municipios, así como de los Organismos Autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, para cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados. Asimismo, señala que **todos los pagos se harán mediante orden escrita en la que se expresará la partida del presupuesto a cargo de la cual se realizan**.

Como se ha dicho anteriormente, es atribución del Tesorero Municipal la de llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos, egresos e inventarios. En ese sentido, los artículos 342, 343, 344 y 345 del Código Financiero del Estado de México y Municipios disponen el sistema y las políticas que deben seguirse para llevar el registro contable y presupuestal de las operaciones financieras, en los siguientes términos:

“**Artículo 342.-** El registro contable del efecto patrimonial y presupuestal de las operaciones financieras, se realizará conforme al sistema y a las disposiciones que se aprueben en materia de planeación, programación, presupuestación, evaluación y contabilidad gubernamental.

(…)”

**“Artículo 343.-** El sistema de contabilidad debe diseñarse sobre base acumulativa total y operarse en forma que facilite la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, egresos y, en general, que posibilite medir la eficacia del gasto público, y contener las medidas de control interno que permitan verificar el registro de la totalidad de las operaciones financieras.

El sistema de contabilidad sobre base acumulativa total se sustentará en los postulados básicos y el marco conceptual de la contabilidad gubernamental.”

“**Artículo 344.-** Las Dependencias, Entidades Públicas y unidades administrativas registrarán contablemente el efecto patrimonial y presupuestal de las operaciones financieras que realicen, en el momento en que ocurran, con base en el sistema y políticas de registro establecidas, en el caso de los Municipios se hará por la Tesorería.

Derogado.

Todo registro contable y presupuestal deberá estar soportado con los documentos comprobatorios originales, los que deberán permanecer en custodia y conservación de las dependencias, entidades públicas y unidades administrativas que ejercieron el gasto, y a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y de los órganos de control interno, por un término de cinco años contados a partir del ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, en el caso de los municipios se hará por la Tesorería.

(…)”

“**Artículo 345.-** Las Dependencias, Entidades Públicas y unidades administrativas deberán conservar la documentación contable del año en curso y la de ejercicios anteriores cuyas cuentas públicas hayan sido revisadas y fiscalizadas por la Legislatura, la remitirán en un plazo que no excederá de seis meses al Archivo Contable Gubernamental. Tratándose de los comprobantes fiscales digitales, estos deberán estar agregados en forma electrónica en cada póliza de registro contable.

El plazo señalado en el párrafo anterior, empezará a contar a partir de la publicación en el Periódico Oficial, del decreto correspondiente. “

De una interpretación sistemática de los artículos transcritos, se desprende primeramente que el registro contable del efecto patrimonial y presupuestal de las operaciones financieras se realizará conforme al sistema y a las disposiciones que se aprueben en materia de planeación, programación, presupuestación, evaluación y contabilidad gubernamental.

Al respecto, si bien es cierto que el Código Financiero del Estado de México y Municipios establece la obligación de los Municipios para llevar los registros contables y presupuestales; también lo es que, dicho ordenamiento jurídico no establece que debemos entender por registro contable y presupuestal; sin embargo, el “Glosario de Términos Administrativos”, emitido por el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. y el “Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación en la Administración Pública”, elaborado por el Grupo de Trabajo de Sistemas de Información Financiera, Contable y Presupuestal de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) señalan las siguientes definiciones de las palabras registro contable y registro presupuestario:

“**REGISTRO CONTABLE**:

Asiento que se realiza en los libros de contabilidad de las actividades relacionadas con el ingreso y egresos de un ente económico.”

“**REGISTRO PRESUPUESTARIO**:

Asiento contable de las erogaciones realizadas por las dependencias y entidades con relación a la asignación, modificación y ejercicio de los recursos presupuestarios que se les hayan autorizado.”

Por otra parte, se establece que el sistema de contabilidad sobre base acumulativa total se sustentará en los principios de contabilidad gubernamental.

Igualmente, los preceptos legales citados señalan que los Sujetos Obligados deben contar con una unidad administrativa que registra contablemente el efecto patrimonial y presupuestal de las operaciones financieras que realizan, en el momento en que ocurran, con base en el sistema y políticas de registro establecidas.

Del ineludible deber del **SUJETO OBLIGADO** de asegurar el secreto fiscal de los contribuyentes.

El artículo 55 del Código Financiero del Estado de México y Municipios establece que **el Ayuntamiento está obligado a guardar absoluta reserva o confidencialidad, respecto de las declaraciones y datos que proporcionen los particulares o terceros relacionados con ellos**, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación.

Por su parte el artículo 143, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dispone que se considera información confidencial, **los secretos** bancario, fiduciario, industrial, comercial, **fiscal**, bursátil y postal, **cuya titularidad corresponda a particulares**, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este orden de ideas, en términos del Cuadragésimo quinto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, para clasificar la información por secreto fiscal, se deberá acreditar que se trata de información tributaria, declaraciones y/o datos suministrados por los contribuyentes o aquellos obtenidos por la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación.

Así, las autoridades municipales, en su carácter de autoridad fiscal, tienen la facultad de clasificar la información obtenida en virtud de los diversos trámites relativos al cobro de contribuciones, como es el caso de impuestos, así como de aquella relacionada con el ejercicio de sus atribuciones de comprobación.

Dada la naturaleza de la información relacionada con el pago de contribuciones, **ésta no está sujeta a temporalidad alguna de clasificación y únicamente pueden tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes legales y los servidores públicos facultados para ello**, por lo que no procede su entrega vía una solicitud de acceso a información pública, ya que al no existir ejercicio de recursos públicos, este tipo de información no reviste un interés público, por el contrario entra dentro del aspecto privado de las personas físicas o jurídico-colectivas, pues la clasificación de la misma no se da en función del tipo de propietario sino de la naturaleza fiscal de la información.

De igual forma, los Sujetos Obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades en materia tributaria no podrán clasificar la información relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal, tal y como lo prevé la Ley de la materia, al excluir de manera clara la posibilidad de clasificar la información fiscal cuanto está relacionada con el ejercicio de recursos públicos.

Sobre el particular, resulta aplicable la tesis aislada con número 1a. CVII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Tomo 1, página 970, de abril de 2013, Décima Época, materia administrativa, de rubro y texto siguiente:

**SECRETO FISCAL. CONCEPTO DE. “**El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de reserva absoluta en lo concerniente a la información tributaria del contribuyente (declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación), a cargo del personal de la autoridad fiscal que intervenga en los trámites relativos a la aplicación de disposiciones fiscales. Así, en principio, dicha medida legislativa establece una concreta carga -de no hacer- impuesta al personal -servidores públicos- de la autoridad fiscal, consistente en que al aplicar las disposiciones fiscales no deben revelar de ninguna forma información tributaria de los contribuyentes. En esto precisamente, desde la perspectiva del derecho positivo, consiste el `secreto fiscal´. Por ende, la intervención legislativa por la cual se estableció el secreto fiscal no se encuentra diseñada normativamente como un principio o derecho fundamental, sino más bien como una regla-fin en los términos señalados. Pero la reserva del secreto fiscal no es absoluta, tal y como lo dispone el mismo artículo 69, con independencia de que en principio así se encuentre establecido textualmente, sino relativa al establecer dicho precepto distintas excepciones al respecto.”(Sic)

Como se aprecia, el secreto fiscal consiste en la obligación de protección absoluta en lo concerniente a la información tributaria del contribuyente (declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación), a cargo del personal de la autoridad fiscal que intervenga en los trámites relativos a la aplicación de disposiciones fiscales.

Lo cual, se traduce en una concreta carga de ***no hacer*** impuesta a la autoridad fiscal, consistente en que **al aplicar las disposiciones fiscales no deben revelar de ninguna forma información tributaria de los contribuyentes**. Por lo cual, **no procede la entrega de dicha información, toda vez que se trata de información de contribuyentes sobre la cual prevalece el secreto fiscal**.

Agregando a lo anterior, podemos advertir que **EL SUJETO OBLIGADO** deberá seguir el procedimiento inmerso en la normatividad aplicable, turnando el requerimiento de información a las dependencias administrativas competentes, vigilando lo establecido por el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, al turnar la solicitud de información a las áreas en las que pudiera obrar la información de conformidad con la fracción XXXIX del artículo tercero de la legislación local vigente en materia de transparencia:

**XXXIX.** **Servidor público habilitado**: Persona encargada dentro de las diversas unidades administrativas o áreas del sujeto obligado, de apoyar, gestionar y entregar la información o datos personales que se ubiquen en la misma, a sus respectivas unidades de transparencia; respecto de las solicitudes presentadas y aportar en primera instancia el fundamento y motivación de la clasificación de la información.

Es así que, resulta necesario traer a colación lo que señala el Criterio 02/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el cual establece lo siguiente:

**Congruencia y exhaustividad**. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.

De esta manera, que los sujetos obligados para garantizar el derecho de acceso a la Información, deberán cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia, esto es, que **la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado**, mientras que **la exhaustividad establece que el sujeto obligado deberá atender de manera expresa cada uno de los puntos solicitados**.

El procedimiento de acceso a la información pública, descrito en el Título Séptimo de la Ley de Transparencia describe los pasos que debe seguir la autoridad para atender las solicitudes que presenten las personas en ejercicio de su derecho, entre los cuales se encuentra el deber de las Unidades de Transparencia de turnar a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, según se asienta en el artículo 162 de la ley citada.

**“Artículo 162.** Las unidades de transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.”

El buscar exhaustivamente en sus archivos, es identificar la unidad(s) administrativa(s) que resguarda el documento al que una persona pretende acceder, es practicar una adecuada gestión documental que nos permite localizar el documento, como bien señala el artículo 159, de la Ley de Transparencia, hay que derivado de lo establecido con antelación en la normatividad, se puede apreciar que si se debe de contar con la información solicitada.

De lo anteriormente expuesto, se advierte que, el Sujeto Obligado cuenta con facultades, atribuciones y competencia para generar, administrar y poseer la información solicitada.

En consecuencia, si bien es cierto que dentro del expediente **SARCOEM**, obra copia de la credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor del **RECURRENTE,** ello no es suficiente para cumplir con lo contenido del artículo 110 de la Ley de la materia, que puntualmente establece que para el ejercicio de derechos ARCO, se deberá contener entre otros requisitos los documentos que acrediten la identidad del titular; es así que el otorgamiento del acceso a datos personales, independientemente de la modalidad elegida, requiere de una entrega en forma física y directa, de conformidad con el artículo 118 de la Ley de la materia que es del tenor literal siguiente:

“**Cumplimiento de la atención de solicitudes ARCO**

**Artículo 118. Las solicitudes de ejercicio de los derechos ARCO se darán por cumplidas a través de expedición de copias simples, copias certificadas, documentos en la modalidad que se hubiese solicitado, previa acreditación de la identidad y personalidad del solicitante o en su caso, ante la notificación de improcedencia de su solicitud. Cuando se determine la procedencia del ejercicio de dichos derechos y éstos se encuentren a disposición del titular en la modalidad que haya escogido previa acreditación, la solicitud se entenderá atendida si el solicitante no acude dentro de los sesenta días posteriores a la notificación**.”

De lo anteriormente transcrito, se observa que la acreditación de la identidad para el ejercicio de los derechos ARCO, se realiza en dos etapas; es decir al momento de la presentación de la solicitud de acceso, donde el **SUJETO OBLIGADO** identifica que se cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 110, y en una segunda instancia al momento de dar cumplimiento en la atención de la solicitud de derechos ARCO cuando así resulte procedente. Pues como se desprende del precepto jurídico antes transcrito, el titular de los datos o su representante, debe acudir dentro de los sesenta días posteriores a la notificación de la respuesta para que previa acreditación de identidad se pongan a su disposición los datos de los cuales requirió su acceso.

Por otro lado, debe puntualizarse que ello surge como medida de seguridad con la finalidad de contar con la estricta certeza de que a quien se le otorga el acceso es efectivamente el titular de los datos. De ahí que se haya llamado a la conciliación por parte de este Órgano Garante, toda vez que así, este Instituto contaría con plenos elementos de certeza, de que efectivamente el solicitante es el titular de los datos a los que se desea tener acceso, pues de haber accedido la hoy **RECURRENTE** para acudir a la conciliación, evidentemente se acreditaría como la titular de los datos, y tanto el **SUJETO OBLIGADO** como este Instituto se habrían allegado de elementos que dieran convicción de lo hecho mención, situación que no se materializó debido a que **el RECURRENTE** no hizo manifiesta su voluntad de conciliar.

Ello en virtud de que si bien no se duda de la buena fe con la que los particulares ejercen sus derechos ARCO, cierto es que eventualmente puede actualizarse algún supuesto de robo de identidad o usurpación de identidad, que consiste en la apropiación de la identidad de una persona; es decir, hacerse pasar por esa persona, asumir su identidad ante otras personas en público o en privado, en general para acceder a ciertos recursos o como resulta del caso concreto de la obtención de información y datos personales a nombre de esa persona.

**Por ello, no basta con adjuntar una identificación en este caso vía SARCOEM,** ya que es del dominio público, en la actualidad resulta de relativa facilidad la obtención de identificaciones, ya sean originales almacenadas en la red de Internet, computadoras de acceso público, equipos personales como computadoras portátiles o de escritorio, tabletas, dispositivos de almacenamiento (CD, USB, SD), teléfonos móviles, o bien, la generación de identificaciones apócrifas.

De lo que adjuntar un archivo fotográfico o escaneado a una solicitud de acceso a datos, no basta para dar total acceso a cualquier dato personal que se requiera vía **SARCOEM** respecto de quien aparezca en la identificación que se adjunte. De ahí que se deba dar el debido resguardo y protección de los datos personales tanto por parte de los responsables de los sujetos obligados, como de este Instituto, ello así por propio mandato de ley.

Sirve de apoyo a lo anterior por analogía el criterio 1/18 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que es del tenor literal siguiente:

**Entrega de datos personales a través de medios electrónicos**. La entrega de datos personales a través del portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, correo electrónico o cualquier otro medio similar resulta improcedente, sin que los sujetos obligados hayan corroborado previamente la identidad del titular.

En atención a las consideraciones señaladas, este Órgano Garante determina ordenar la entrega de la documentación solicitada por el particular, previa acreditación de la personalidad.

Es de subrayar que la información requerida por el particular no son documentos en los que actuó como representante legal de la *persona moral XXXXXX XXXXX XX XXXXXX S.A. DE C.V*, pues no existe evidencia alguna de que así sea en el expediente;, sino de manera particular, pidiendo acceder a sus datos personales,prerrogativas que se encuentran invariablemente ligadas a los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. En este orden de ideas, al particular se le debe garantizar el acceso a sus datos personales, debiendo el Sujeto Obligado proporcionar los documentos en que consten los tramites, solicitudes, pagos de derechos e impuestos, en los que obren sus datos personales.

### c) Versión pública

Para el caso de que el o los documentos de los cuales se ordena su entrega contengan datos personales susceptibles de ser testados, deberán ser entregados en **versión pública**, pues el derecho de acceso a la información tiene como limitante el respeto a la intimidad y a la vida privada de las personas, es por ello que este Instituto debe cuidar que los datos personales que obren en poder de los Sujetos Obligados sean protegidos y únicamente se den a conocer aquéllos que abonen a la rendición de cuentas y a la transparencia en el ejercicio de las atribuciones que tienen conferidas. De este modo, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la ley permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de los particulares.

A este respecto, los artículos 3, fracciones IX, XX, XXI y XLV; 51 y 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios establecen:

**“Artículo 3.** Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

**IX.** **Datos personales:** La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;

**XX.** **Información clasificada:** Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial;

**XXI.** **Información confidencial**: Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;

**XLV. Versión pública:** Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.

**Artículo 51.** Los sujetos obligados designaran a un responsable para atender la Unidad de Transparencia, quien fungirá como enlace entre éstos y los solicitantes. Dicha Unidad será la encargada de tramitar internamente la solicitud de información **y tendrá la responsabilidad de verificar en cada caso que la misma no sea confidencial o reservada.** Dicha Unidad contará con las facultades internas necesarias para gestionar la atención a las solicitudes de información en los términos de la Ley General y la presente Ley.

**Artículo 52.** Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, así como las resoluciones a los recursos que en su caso se promuevan serán públicas, y de ser el caso que contenga datos personales que deban ser protegidos se podrá dar su acceso en su versión pública, siempre y cuando la resolución de referencia se someta a un proceso de disociación, es decir, no haga identificable al titular de tales datos personales.” (Énfasis añadido)

Así, los datos personales que obren en poder de los Sujetos Obligados deben estar protegidos, adoptando las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas necesarias para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, considerando además, que conforme al principio de finalidad, todo tratamiento de datos personales que se efectúe deberá estar justificado en la Ley, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 22, párrafo primero, relacionado con el 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, los cuales se transcriben para mayor referencia:

**“Artículo 22.** Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.

**Artículo 38.** Con independencia del tipo de sistema y base de datos en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable adoptará, establecerá, mantendrá y documentará las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, a través de controles y acciones que eviten su daño, alteración, pérdida, destrucción, o el uso, transferencia, acceso o cualquier tratamiento no autorizado o ilícito, de conformidad con lo dispuesto en los lineamientos que al efecto se expidan.**”**

De este modo, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la Ley de la materia permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de los particulares toda vez que ésta tiene por objeto proteger datos personales, entendiéndose por tales, aquéllos que hacen identificable a una persona.

Lo anterior es así, en virtud de que toda la información relativa a una persona física o jurídico colectiva que le pueda hacer identificada o identificable constituye un dato personal en términos del artículo 4, fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; por consiguiente, se trata de información confidencial que debe ser protegida por **EL SUJETO OBLIGADO,** por lo que, todo dato personal susceptible de clasificación debe ser protegido.

La finalidad de la versión pública es salvaguardar la vida, integridad, seguridad, patrimonio y privacidad de las personas; de tal manera que, todo aquello que no tenga por objeto proteger lo anterior, es susceptible de ser entregado. En otras palabras, la protección de datos personales es una derivación del derecho a la intimidad.

Asimismo, es importante señalar que dicha clasificación se tiene que efectuar mediante la forma y formalidades que la ley de la materia impone; es decir, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado de su Comité de Transparencia, en términos de los artículos 49, fracción VIII y 132, fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como los numerales Segundo, fracción XVIII, y del Cuarto al Décimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, que literalmente expresan:

***Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios***

**“Artículo 49.** Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes atribuciones:

**VIII.** Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información;

**Artículo 132.** La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

**I.** Se reciba una solicitud de acceso a la información;

**II.** Se determine mediante resolución de autoridad competente; o

**III.** Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.**”**

**“Segundo. -** Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá por:

**XVIII.** **Versión pública:** El documento a partir del que se otorga acceso a la información, en el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de manera genérica, fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través de la resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia.

**Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información**

**Cuarto.** Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.

Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.

**Quinto.** La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley Federal y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones aplicables en la materia.

**Sexto.** Se deroga.

**Séptimo.** La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

**I.** Se reciba una solicitud de acceso a la información;

**II.** Se determine mediante resolución del Comité de Transparencia, el órgano garante competente, o en cumplimiento a una sentencia del Poder Judicial; o

**III.** Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas.

Los titulares de las áreas deberán revisar la información requerida al momento de la recepción de una solicitud de acceso, para verificar, conforme a su naturaleza, si encuadra en una causal de reserva o de confidencialidad.

**Octavo.** Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.

Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación deberá comprender el análisis de la prueba del daño a que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, en relación con el artículo trigésimo tercero de los presentes lineamientos, así como las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.

**Noveno.** En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen, siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos.

**Décimo.** Los titulares de las áreas, deberán tener conocimiento y llevar un registro del personal que, por la naturaleza de sus atribuciones, tenga acceso a los documentos clasificados. Asimismo, deberán asegurarse de que dicho personal cuente con los conocimientos técnicos y legales que le permitan manejar adecuadamente la información clasificada, en los términos de la Ley General de Archivo, Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos y demás normatividad aplicable.

En ausencia de los titulares de las áreas, la información será clasificada o desclasificada por la persona que lo supla, en términos de la normativa que rija la actuación del sujeto obligado.

**Décimo primero.** En el intercambio de información entre sujetos obligados para el ejercicio de sus atribuciones, los documentos que se encuentren clasificados deberán llevar la leyenda correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VIII de los presentes lineamientos.**”**

Consecuentemente, se destaca que la versión pública que elabore **EL SUJETO OBLIGADO** debe cumplir con las formalidades exigidas en la Ley, por lo que para tal efecto emitirá el **Acuerdo del Comité de Transparencia** en términos de los artículos 122 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, con el cual sustentará la clasificación de datos y con ello la "versión pública" de los documentos materia de la solicitud, ya que de no hacerlo implica que lo entregado no es legal ni formalmente una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; pues no se señalan las razones por las que no se aprecian determinados datos -ya sea porque se testan o suprimen- lo cual deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva, es decir, si no se exponen de manera puntual las razones, se estaría violentando desde un inicio el derecho de acceso a la información del solicitante.

### d) Conclusión

Con base en todo lo expuesto, este Órgano Garante considera fundadas las razones o motivos de inconformidad expuestos por la parte Recurrente y con fundamento en artículo 137 fracción IV, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, este Instituto considera procedente **ORDENAR** al **SUJETO OBLIGADO** dé trámite y respuesta a la solicitud de acceso a la información, atendiendo lo señalado en el presente Considerando.

Por lo expuesto y fundado, este Pleno:

**R E S U E L V E**

**PRIMERO**. Resultan fundadas lasrazones o motivos de inconformidad hechos valer en el Recurso de Revisión **05872/INFOEM/AD/RR/2024,** en términos del **Considerando** **SEGUNDO** de la presente Resolución**.**

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** atienda la Solicitud de Acceso a Datos **00001/CUAUTIZC/AD/2024,** en términos del Considerando **SEGUNDO** de esta resolución; y en su caso haga entrega de la información solicitada, de ser procedente en **versión pública**, vía Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales en el Estado de México (**SARCOEM**) y por **correo electrónico**, previa acreditación de identidad y personalidad, la siguiente información:

1. Los documentos en los que conste o se adviertan los tramites, solicitudes, pagos de derechos e impuestos, realizados por el ciudadano referido en la solicitud de acceso a datos, del periodo comprendido del 5 de junio de 2020 al 13 de agosto de 2024.

Para la acreditación de la identidad y entrega de la documentación, la Unidad de Transparencia deberá indicar a la Recurrente, a través del **SARCOEM** y por **correo electrónico** el domicilio, los días y horarios de atención, así como el nombre del servidor público que le atenderá.

Para el caso que no se hayan generado, poseído o administrado los datos personales que se ordenan en el inciso a), bastará que lo haga del conocimiento de **LA PARTE** **RECURRENTE** de manera fundada y motivada en términos del artículo 19, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de aplicación supletoria.

De ser necesarias las versiones públicas, por existir datos personales de terceros en la documentación a entregar, se deberá entregar el Acuerdo del Comité de Transparencia mediante el cual se apruebe la clasificación de información, en términos del artículo 49, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**TERCERO**. **NOTIFÍQUESE** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado** vía Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de México (**SARCOEM**), para que en los términos previstos en el artículo 137, segundo párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; con relación en los artículos 186, último párrafo y 189, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios de aplicación supletoria por disposición del artículo 11 de la citada Ley de Datos, dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente resolución.; y se le apercibe que, en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 154 y 155 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.

De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución

**CUARTO. NOTIFÍQUESE** a **LA PARTE RECURRENTE** a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de México (**SARCOEM**) y **correo electrónico** la presente resolución.

**QUINTO. HÁGASE** del conocimiento a **LA PARTE RECURRENTE** que de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

SCMM/AGZ/DEMF/AGE

1. Artículo 86, Ley Orgánica Municipal del Estado de México. [↑](#footnote-ref-1)
2. Artículo 87, Ídem. [↑](#footnote-ref-2)
3. Artículo 93, Ley Orgánica Municipal del Estado de México. [↑](#footnote-ref-3)